

DECRETO 939

Educación — Títulos de nivel universitario expedidos por establecimientos regidos por los dec.-leyes 17.604/67 y 17.778/68 (leyes 17.604 y 17.778) — Incumbencias profesionales.

Fecha: 10 abril 1975.

Publicación: B. O. 16/IV/75.

Citas legales: ley 20.524: XXXIII-C, 2962; D.-ley 17.604/67 (ley 17.604): XXVIII-A, 154; D.-ley 17.778/68 (ley 17.778): XXVIII-B, 1887; D. 8472/69: XXX-A, 336.

Visto lo establecido en el art. 16, inc. 12 de la ley 20.524, en el art. 4º, inc. c) del dec.-ley 17.604-67 y en el art. 8º, inc. b) del dec.-ley 17.778/68; y

Considerando: Que quienes egresan de establecimientos que funcionan según el régimen de los dec.-leyes 17.604/67 y 17.778/68, habiendo obtenido un título habilitado por el Estado con validez nacional, tienen el derecho de ejercer aquellas actividades a las que los capacita su formación académica previa inscripción del título en la matrícula correspondiente, aunque esos títulos no sean los que expresamente se mencionan en las leyes reglamentarias del ejercicio de las diversas profesiones.

Que a diferencia de lo que ocurre en el ámbito de las universidades nacionales, dichos establecimientos no se hallan facultados para fijar los alcances de los títulos y grados que expiden por lo que debe establecerse el procedimiento aplicable para determinar las respectivas incumbencias profesionales.

Que siendo el Ministerio de Cultura y Educación el organismo competente para autorizar la creación de carreras en el ámbito de la enseñanza universitaria privada, aprobar la estructura general de los respectivos planes de estudio y habilitar con validez nacional los títulos que expiden los establecimientos que funcionan según el régimen de los mencionados decreto-leyes, resulta procedente que sea ese departamento de Estado el que defina las incumbencias profesionales correspondientes a esos títulos.

Que por otra parte, los títulos así habilitados tienen los mismos efectos que los títulos que otorgan las universidades nacionales, y si son de carácter profesional facultan para el ejercicio de las actividades consiguientes, sin perjuicio del poder de policía que corresponda a las autoridades locales.

Que para fijar los alcances de un determinado título universitario, es conveniente considerar las in-

cumbencias que proponga el establecimiento otorgante, así como consultar a aquellos consejos y asociaciones profesionales vinculados con la orientación y posible área de acción sobre la cual tengan incidencia esas incumbencias, antes de resolver en definitiva.

Que este procedimiento, propuesto por la Dirección Nacional de Altos Estudios, cuenta con opinión favorable dentro de los sectores interesados, según surge de la consulta oportunamente efectuada por dicha Dirección Nacional.

Que para que títulos universitarios con distinta denominación puedan ser considerados equivalentes a los efectos del ejercicio profesional, el Ministerio de Cultura y Educación debe determinar dentro de un plazo prudencial si existe similitud en las exigencias de los respectivos planes de estudio y en la extensión y nivel de los distintos cursos.

Que cuando el ejercicio profesional de una carrera cursada en establecimiento universitario privado autorizada afecte el campo de acción de más de una profesión, resulta conveniente que los tribunales examinadores ante los que deben rendirse las pruebas finales de capacidad profesional previstas en el art. 18 del dec. 8472/69, sean integrados con los representantes de aquellos consejos o asociaciones profesionales vinculados con la orientación y posible área de acción sobre la cual tengan incidencia las incumbencias asignadas al título que se pretende habilitar.

Por ello, y de acuerdo con lo aconsejado por el señor ministro de Cultura y Educación, la Presidente de la Nación Argentina, decreta:

Art. 1° — Las incumbencias profesionales correspondientes a aquellos títulos de nivel universitario que expiden los establecimientos que funcionan bajo la supervisión permanente del Ministerio de Cultura y Educación, dentro de los regímenes fijados por los dec.-leyes 17.604/67 y 17.778/68, serán establecidos por dicho Ministerio cuando esos títulos no pudieran ser considerados equivalentes a los que expiden las universidades nacionales, y se trate de actividades cuyo ejercicio profesional se halla reglamentado por el Estado.

Art. 2° — El Ministerio de Cultura y Educación requerirá al respectivo establecimiento que proponga las incumbencias que a su criterio deberían asignarse al título, y no podrá determinarlas sin la previa consulta a los consejos profesionales vinculados con la orientación y posible área de acción sobre la cual aquéllas tengan incidencia.

Art. 3° — Los consejos profesionales consultados por aplicación de lo dispuesto en el art. 2° deberán expedirse dentro del término perentorio de 60 (sesenta) días a partir de la fecha en que cuenten con los planes y programas de estudio de la carrera correspondiente y con la propuesta de incumbencias.

Transcurrido dicho plazo sin que los consejos profesionales hubieran emitido opinión, se considerará que no tienen objeciones que formular y el Ministerio de Cultura y Educación procederá a expedirse sobre el proyecto de carrera o de título. En caso de resolución favorable, determinará al mismo tiempo las incumbencias profesionales, debiendo inscribirse el título en la matrícula que corresponda y reconocerse las incumbencias asignadas.

Art. 4° — La inscripción en la matrícula de un título otorgado por establecimientos regidos por el dec.-ley 17.604/67 o por el dec.-ley 17.778/68, cuya denominación sea distinta a la de los títulos expresamente mencionados en las leyes que reglamentan el ejercicio de las diversas profesiones, con el carácter de equivalente a los que facultan para ejercer actividades dentro del ámbito de un determinado Consejo Profesional, no podrá tener efecto sin el previo acuerdo del Ministerio de Cultura y Educación acerca de la similitud en las exigencias de los respectivos planes de estudio y en la extensión y nivel de los distintos cursos.

Dicho acuerdo será requerido por el respectivo Consejo Profesional dentro del término de 10 (diez) días a partir de la fecha en que se pretendió inscribir el título, y el mencionado Ministerio deberá dictaminar dentro del término de 30 (treinta) días. Vencido este plazo sin que hubiera emitido opinión, se considerará que no tiene objeciones que formular al respecto, y el Consejo Profesional procederá sin más trámite a la inscripción correspondiente.

Art. 5° — Agrégase al art. 18, inc. b) del dec. 8472/69, el texto siguiente:

"Cuando el título otorgado por el establecimiento corresponda a carreras cuyo contenido abarque más de una disciplina profesional, el tribunal podrá ser integrado con representantes de aquellos consejos o asociaciones profesionales vinculados con la orientación y posible área de acción sobre la cual tengan incidencia las incumbencias asignadas al título. Será presidido en todos los casos por el representante del Estado nacional, y cuando el número de sus integrantes no permita adoptar criterios en mayoría prevalecerá el criterio del presidente de tribunal".

Art. 6° — Comuníquese, etc.— M. de Perón.—
Ivanishevich.